ÍNDICE

CONTENIDO DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

NÚMERO		IDENTIFICACIÓN, DEBATE Y RESOLUCIÓN. PÁGINAS.
7/2017	<p>CONTRADICCIÓN DE TESIS, SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO Y TERCERO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.</p> <p>(BAJO LA PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO)</p>	3
356/2016	<p>CONTRADICCIÓN DE TESIS, SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.</p> <p>(BAJO LA PONENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ)</p>	4 Y 5 RETIRADO
287/2017	<p>CONTRADICCIÓN DE TESIS, SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA PENAL DEL MISMO CIRCUITO.</p> <p>(BAJO LA PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO)</p>	6 A 20

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TRIBUNAL PLENO

**SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL LUNES
24 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

ASISTENCIA:

PRESIDENTE: SEÑOR MINISTRO:

LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

SEÑORES MINISTROS:

**ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS
JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA
JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ
JAVIER LAYNEZ POTISEK
ALBERTO PÉREZ DAYÁN**

AUSENTE: SEÑOR MINISTRO:

**EDUARDO MEDINA MORA I.
(POR GOZAR DE VACACIONES, EN
VIRTUD DE HABER INTEGRADO LAS
COMISIONES DE RECESO
CORRESPONDIENTES AL PRIMER Y
SEGUNDO PERÍODOS DE SESIONES DE
DOS MIL DIECIOCHO)**

(SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 12:15 HORAS)

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 96 ordinaria, celebrada el jueves veinte de septiembre del año en curso.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señoras Ministras, señores Ministros, está a su consideración el acta. Si no tienen observaciones les pregunto: ¿en votación económica se aprueba? **(VOTACIÓN FAVORABLE).**

QUEDA APROBADA.

Continuamos, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la

**CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2017,
SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES
COLEGIADOS DEL VIGÉSIMO OCTAVO
CIRCUITO Y TERCERO DEL VIGÉSIMO
CIRCUITO.**

Bajo la ponencia del señor Ministro Pardo Rebolledo y conforme al punto resolutivo que propone:

ÚNICO. SE DECLARA SIN MATERIA LA PRESENTE CONTRADICCIÓN DE TESIS A QUE ESTE TOCA SE REFIERE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO CONSIDERANDO DE ESTE FALLO.

NOTIFÍQUESE; “...”

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Someto a su consideración todos los puntos propuestos, señoras y señores Ministros, en atención a que son competencia, legitimación, las posturas contendientes y la existencia de la contradicción, nos lleva a este resolutivo a dejarlo sin materia. ¿Estarían de acuerdo, en votarlo de manera económica? **(VOTACIÓN FAVORABLE).**

QUEDA ENTONCES APROBADO, Y CON ELLO RESUELTA LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2017.

Continuamos, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la

**CONTRADICCIÓN DE TESIS 356/2016,
SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES
COLEGIADOS SEGUNDO DEL
VIGÉSIMO CIRCUITO Y TERCERO EN
MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.**

Bajo la ponencia de la señora Ministra Piña Hernández y conforme a los puntos resolutivos que proponen:

PRIMERO. SÍ EXISTE CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE EL CRITERIO SUSTENTADO POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, CONFORME AL CONSIDERANDO CUARTO DE ESTA RESOLUCIÓN.

SEGUNDO. DEBE PREVALECER CON CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA EL CRITERIO SUSTENTADO POR EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO ÚLTIMO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

TERCERO. DESE PUBLICIDAD A LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE AQUÍ SE SUSTENTA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE AMPARO

NOTIFÍQUESE; “...”

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor secretario. Pongo a su consideración los cuatro primeros apartados de esta propuesta, el primero relativo a la narrativa de la denuncia de la contradicción, el segundo a su trámite, el tercero a la

determinación de la competencia y legitimación, y el cuarto a la narrativa de las posturas contendientes. Señora Ministra, por favor.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Gracias señor Ministro Presidente. Si no tiene inconveniente la señora y los señores Ministros, quisiera retirar el proyecto, porque quiero reflexionar sobre algunos puntos en la presentación de la postura.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Muy bien señora Ministra. Desde luego, a petición de cualquier Ministro, y especialmente del ponente, vamos a dejar el asunto retirado de la lista.

RETIRADO.

Denos cuenta, entonces, con el siguiente asunto, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la

**CONTRADICCIÓN DE TESIS 287/2017,
SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES
COLEGIADOS SÉPTIMO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL TERCER
CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA
PENAL DEL MISMO CIRCUITO.**

Bajo la ponencia del señor Ministro Pardo Rebolledo y conforme a los puntos resolutivos que proponen:

PRIMERO. EXISTE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS DENUNCIADA.

SEGUNDO. DEBE PREVALECER, CON CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA, EL CRITERIO SOSTENIDO POR ESTE TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA TESIS REDACTADA EN EL ÚLTIMO CONSIDERANDO DEL PRESENTE FALLO.

TERCERO. DESE PUBLICIDAD A LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE SE SUSTENTA EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 219 DE LA LEY DE AMPARO.

NOTIFÍQUESE; “...”

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor secretario. Pongo a su consideración los primeros apartados de esta propuesta, el primero relativo a la denuncia, el segundo a su trámite e integración, el tercero a la competencia de este Tribunal y legitimación de los promoventes, y el cuarto a la narrativa de los criterios de los tribunales contendientes.

¿Alguna observación en estos cuatro primeros apartados? Si no hay, ¿en votación económica se aprueban? **(VOTACIÓN FAVORABLE).**

QUEDAN APROBADOS.

En relación con la existencia de la contradicción, tiene la palabra el señor Ministro Pardo, ponente de este asunto.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Muchas gracias señor Ministro Presidente, señoras y señores Ministros. El presente asunto se somete a su consideración y en el mismo los tribunales colegiados conocieron de casos en los que determinaron si, al momento de evaluar la personalidad de un apoderado con facultades generales judiciales que presenta la demanda de amparo, el juzgador debe considerar la restricción establecida por el artículo 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco, que exige ser licenciado en derecho o actuar conjuntamente con uno de estos profesionistas.

Por lo que se refiere a la existencia de la contradicción, por un lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 278/2001, consideró que el tribunal unitario de circuito violó el procedimiento porque no se cercioró si el apoderado de la sociedad quejosa cumplió con el requisito previsto en el artículo 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco.

En el análisis respectivo, indicó que el precepto local obliga a que el apoderado general judicial compruebe que es abogado o licenciado en derecho o, en su defecto, actúe conjuntamente con quien tenga un título para esa profesión, esto por tratarse de una representación especial.

En contraposición, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 198/2017, indicó que no era exigible el requisito previsto por el artículo 2207 del código sustantivo local, argumentando, en primer lugar, que para estudiar la personalidad de un apoderado que presenta una demanda de amparo no debía remitirse directamente al Código Civil local, sino que el juez tenía que apegarse a las reglas de supletoriedad establecidas en el artículo 10 de la de la Ley de Amparo, adicionalmente expresó que, una vez aplicado el régimen supletorio, si la ley que regula el acto reclamado era federal, entonces debían aplicarse las reglas del contrato de mandato contempladas en el Código Civil Federal, por lo que insistió que no era exigible un requisito constituido en un código local.

Asimismo, recalcó que el requisito en cuestión sólo era para los apoderados que actuaran dentro del Estado de Jalisco y para asuntos de carácter local, por ello descartó que fuera aplicable la norma al juicio de amparo por su naturaleza federal, y también indicó que la necesidad de que un apoderado sea o actúe como un profesionista del derecho impedía el acceso a la justicia por razones meramente técnico-jurídicas.

Atendiendo a lo anterior, se fija como punto de contradicción dilucidar si, al presentar una demanda de amparo debe tomarse en cuenta el requisito que establece el artículo 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco, cuando se analiza la personalidad de un apoderado con facultades generales judiciales; este sería el punto de contradicción que se propone, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Está a su consideración el punto de contradicción que nos acaba de señalar el señor Ministro Pardo ¿Alguna observación respecto del punto de contradicción? Les pregunto entonces, ¿en votación económica se aprueba?
(VOTACIÓN FAVORABLE)

QUEDA APROBADO.

Y continuamos señor Ministro, por favor.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Sí señor Ministro Presidente. Por lo que se refiere a la propuesta para la resolución en esta contradicción, se hace inicialmente un análisis del contenido de los artículos 103 y 107 constitucionales, en relación con el 5o. de la Ley de Amparo vigente, para precisar quiénes están legitimados para presentar una demanda de amparo; posteriormente, se analiza el artículo 6o. de la Ley de Amparo vigente y el 4o. de la ley abrogada, en donde se contemplan diversas figuras de representación legal y voluntaria para que una persona presente una demanda de amparo a nombre de otra; se señala, entonces que, para que un apoderado actúe en el juicio de amparo, el proyecto estima necesario que el juez se pronuncie y reconozca la personalidad derivada; para ello, debe estudiar dos

cuestiones, (i) que sea posible realizar determinado acto jurídico procesal mediante la figura de representación que se pretende utilizar, en términos de la ley que rige el procedimiento, y (ii) que el poder exista y contemple las facultades necesarias para el acto jurídico determinado, pero acorde a lo que establece la legislación común.

Para el primer aspecto, el artículo 10 de la Ley de Amparo señala que la representación debe acreditarse, en primer término, conforme a lo dispuesto en la propia Ley de Amparo y, en su defecto, de conformidad con el ordenamiento que rija la materia del acto reclamado y, finalmente, cuando tampoco se prevea en este caso, se remitirá a las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles.

En el proyecto también se precisa que el juzgador debe analizar si el poder es un acto jurídico existente que produce efectos plenamente, esto se corrobora con la legislación en materia común, de conformidad con las disposiciones del contrato de mandato.

De esa forma, el juez debe analizar el contenido del documento donde conste el poder otorgado y determinar si es un acto jurídico regular, así como su alcance, de conformidad con el código civil al que las partes decidieron sujetarse.

Siguiendo esta lógica, la consulta propone que si, el poder surge de la manifestación de la voluntad de una persona, que pretende facultar a otra para que lleve a cabo determinados actos jurídicos a su nombre, y si el poderdante decide, en ejercicio de la

autonomía de la voluntad, que la representación se lleve a cabo mediante las facultades generales descritas y restringidas, en términos del código civil sustantivo, entonces debe atenderse a esa manifestación.

Por tanto, se concluye que, si se promueve un amparo por apoderado con facultades judiciales generales, en términos del artículo 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco, entonces el juzgador debe corroborar que quien suscribe la demanda es abogado o licenciado en Derecho o, en su defecto, que lo hace conjuntamente con alguno de estos profesionales; lo anterior, ya que fue voluntad del representado restringir la actuación de sus representantes en esos términos.

Lo antes expuesto pudiera tener alguna excepción, en el caso en que en el mismo instrumento conste que también se concedieron diversas facultades cuyo ejercicio sea menos restrictivo, como sería un poder general para pleitos y cobranzas, en términos del artículo 2554 del Código Civil Federal, el Código Civil para la Ciudad de México o cualquier otro código civil correlativo en otra entidad, pues se reitera, el interesado es quien modula el actuar de sus representantes. Ésta sería la propuesta, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro Pardo. Señora Ministra Luna.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Ministro Presidente. Con muchísimo respeto, me apartaría del criterio que

se está proponiendo en la contradicción de tesis y mencionaré por qué.

Lo que sucede es que se dice que, conforme al artículo 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco, en el momento en que se da el poder para pleitos y cobranzas tiene que ser para un abogado y que, si a quien le otorgan este poder no es abogado, entonces, debe de asociarse con otro abogado para que el poder tenga validez; bueno, son las leyes que están establecidas en el Estado de Jalisco –lo cual respeto muchísimo–, pero el problema es que, para efectos del juicio de amparo, le dicen: conforme a este artículo, no te tengo por reconocida la personalidad, porque se la diste a un ingeniero o a alguien que no tiene una profesión y, conforme a ese artículo, necesitaba ser abogado o estar asociado a un abogado, entonces, no le doy validez al poder. Un colegiado dice que sí, otro que no, porque debe ser la ley del acto y el otro asunto era fiscal; el primer asunto era penal y, entonces, por eso le aplican literalmente lo que dice el artículo 2207.

Respetuosamente, me aparto porque creo que el artículo 2207 está yendo más allá de lo que es la finalidad del juicio de amparo; ¿el juicio de amparo qué es lo que nos dice para efectos de los poderes? el artículo 10 nos dice lo siguiente: “La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley.” ¿cuál ley? de Amparo.

Si buscamos algún artículo que nos diga cómo se acredita la personalidad ¿qué creen? En esta nueva Ley de Amparo no hay, pero en la anterior sí había, lo único que nos dice es: “En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la

misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado –dice: en los casos no previstos– y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles”; cuando se trata de las autoridades, es otra cosa.

La Ley de Amparo anterior, establecía el artículo 14 cómo se podía acreditar la personalidad por poder, decía: “No se requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario promueva y siga el juicio de amparo; pero sí para que desista de éste.”

Entonces, no exigía realmente ninguna formalidad, mi pregunta es: La nueva Ley de Amparo, dice que debe regirse conforme a la Ley de Amparo, si buscamos ahora, no hay el equivalente al artículo 14 que existía en la ley anterior, y que me parecía puesto en razón; el hecho de que no exista un artículo que conforme a la ley anterior estableciera que no se requería ninguna formalidad, más que el establecer el poder en los términos respectivos, donde quedara acreditado que –de alguna manera– se estaba dando el mandato y que sólo se exigía cláusula especial, pero para efecto de desistimiento, que era otra cosa totalmente diferente.

Recuerdo que todavía bajo la vigencia de la anterior Ley de Amparo, en algunas ocasiones, se dieron muchos sobreseimientos del análisis de los poderes, pero ¿cuál era el problema que se presentaba al analizar el poder? Lo que sucedía es que no se establecían las facultades de quien otorgaba ese poder, entonces no estaba la cadena de personas con facultades para otorgar ese poder, y se sobreseía en el juicio diciendo que no se había

acreditado la personalidad, ahí el problema fundamental era que el poder tenía un problema de no acreditamiento de que si en realidad quien otorgaba ese poder tenía o no facultades para hacerlo y así se sobreseyó en muchos juicios de amparo, lo cual creo que resultaba correcto.

Pero aquí, el artículo está determinando que, si no hay abogado, no hay juicio de amparo, no se puede promover, es decir, no se le está dando el valor de haberse otorgado el mandato y creo que la razón de ser de un poder es otorgar un mandato a la persona que se considere conveniente.

Ahora, la razón de ser un abogado patrono o de un autorizado para llevar un juicio en términos amplios en amparo, pues debe de estar justificado con la cédula profesional y ser abogado, pero creo que son dos cosas distintas: una es el mandato, y otro es el abogado patrono, que –de alguna manera– va a llevar a cabo el juicio. Me parece que, si ahora se le da validez a ese artículo y se dice que esto hace imposible aceptar que el poder es adecuado, porque no se señaló a un abogado en ese poder y no se reconoce la personalidad para efectos del juicio de amparo, hay un retroceso, y si hemos hablado de que existe la posibilidad de que los artículos cuiden los derechos humanos de manera progresiva, pues esto sería un retroceso porque nunca se había pedido, por una parte.

Por otra parte, en la Segunda Sala analizamos un asunto en materia laboral, en la que se decía, en la aplicación del artículo 692, en la fracción II, se establecía lo siguiente: “Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados

de éstas, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Sólo se podrá autorizar a otras personas para oír notificaciones y recibir documentos, pero éstas no podrán comparecer en las audiencias ni efectuar promoción alguna.” y luego, la fracción III decía: “Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello.”; sin embargo, en la litis que se desarrolla en este juicio, se decía que, en conjunción con estas dos fracciones, el apoderado debería ser abogado; entonces, emitimos una tesis en donde se hizo una interpretación –sé que la situación no es exactamente igual, pero de alguna manera, interpretamos- y dijimos: no, son dos cosas diferentes, cuando presentes un poder, basta que, quien te lo otorgue, tenga las facultades para dártelo sin mayor formalidad y, cuando te presentes como abogado patrono o como autorizado en el juicio, entonces existe la obligación de pedirte la cédula profesional.

El rubro de la tesis dice: “PERSONALIDAD DEL APODERADO DE UNA PERSONA MORAL EN EL JUICIO LABORAL. PARA TENERLA POR RECONOCIDA ES SUFICIENTE QUE CUMPLA CON EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 692, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO”, y el requisito de la fracción III es que quien le otorgue el poder tenga facultades para eso, no necesariamente la comprobación de que es abogado; entonces, una situación similar sucede aquí, nada más que dicha en un artículo expreso de mandato, en donde le

esté exigiendo que, además de que haya el requisito –podemos decir– de que le otorgue el poder quien tenga facultades, sea abogado, porque es para pleitos y cobranzas y, si no lo es, entonces que esté asociado a otro abogado para que se le pueda aceptar la personalidad.

En lo personal, me parece que en esto hay una regresión en relación con lo que la Ley de Amparo establecía respecto del artículo 14.

Creo que basta con que quien otorgue el poder tenga facultades para hacerlo y, en todo caso, si es o no abogado, pues podrá –en todo caso–, la persona que sea el abogado patrono o el autorizado, acreditar con la cédula profesional correspondiente, pero no como requisito para aceptar la personalidad.

Esto –en mi opinión– es un exceso que impide el acceso a la justicia de la persona que –en un momento dado– está compareciendo a través de un abogado y, además un comparativo a lo mejor un poco simple, pero el que va por su propio derecho, está peleando un derecho que le corresponde, no necesariamente es abogado; entonces, ¿tendría que ir asociado con un abogado para que pueda pedir amparo? Es una situación similar; entonces, creo que es un exceso y, por esa razón, –muy respetuosamente– estaré en contra. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señora Ministra. ¿Alguien más? Señor Ministro Laynez.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: También me surgen dudas con el proyecto y además –sobre todo– si vemos el artículo 6o. de la Ley de Amparo, que dice: “El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.” Me parece que bastaría con que el apoderado, con quien la persona puede otorgar el poder, tiene las facultades para hacerlo, porque el artículo 5º lo está diciendo de esta manera como para decirle: no, ese apoderado que nombraste –a pesar de que es tu apoderado– tiene escritura notariada y es tu apoderado, la legislación en Jalisco dice que tiene que ser abogado. Lo planteo como una duda, y creo que también me apartaría del proyecto, más por las razones que se desarrollaron. Gracias Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. ¿Alguien más señoras, señores Ministros? Señor Ministro Pardo.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Gracias señor Presidente. Lo que consideramos en la propuesta es atender a la manifestación del representado, porque en el Código Civil del Estado de Jalisco se puede otorgar un poder general para pleitos y cobranzas, que –obviamente– no tiene ninguna restricción ni ninguna limitación, o se puede otorgar un poder en términos del artículo 2207, y este artículo le denominan poderes generales judiciales.

El artículo establece que: “pueda representar al poderdante en todo negocio de jurisdicción voluntaria, mixta y contenciosa, desde su principio hasta su fin; siempre que no se trate de actos que conforme a las leyes requieran poder especial, en tal caso se consignarán detalladamente las facultades que se confieran con su carácter de especialidad. Este tipo de poderes sólo podrá otorgarse a personas que tengan el título de abogado, licenciado en derecho o a quien no tenga ese carácter se encuentre asesorado necesariamente por profesionales del derecho”; entonces, aquí lo que decimos es: si una persona otorga a otra un poder en términos de este artículo, lo está limitando y se lo está dando en función de su defensa judicial, porque se llama poder general judicial; entonces, si esa persona que está facultada para llevar a cabo ese proceso en representación del poderdante, luego llega a la instancia de amparo y promueve una demanda de amparo, entonces uno de los colegiados dijo: a ver, este es un poder específico y tiene un requisito también especial, que es que el apoderado siempre tiene que ser o un licenciado en derecho o una persona asociada a un licenciado en derecho.

Lo que estamos proponiendo en la tesis es decir: si el poder se da con base en este artículo, pues hay que atender a la manifestación del poderdante, porque él quiere ser representado en términos de este artículo, si no, pues expediría un poder general para pleitos y cobranzas, que ese no tiene ninguna limitante.

No es que estemos diciendo que siempre y en todos los casos los jueces de amparo tendrán que atender a las disposiciones de este artículo, lo que estamos diciendo es que hay que atender el poder que da lugar a esa representación, y si ese poder, ese documento

se da con base en este artículo 2207, entonces hay que exigir el acreditamiento del requisito de que es abogado o asociado con un abogado. Insisto, no es la postura de que en todos los casos en el Estado de Jalisco se tenga que acreditar que son abogados para poder ser representantes del quejoso; sólo que, cuando el poder que da lugar a la representación está expedido con base en este artículo 2207, -porque ahí me parece que el poderdante expresa su voluntad de ser representado por una persona con esa característica especial, es decir, debe ser un licenciado en derecho o asociado licenciado en derecho; en fin, ese era el comentario que quería hacer. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. ¿Alguien más, señoras Ministras, señores Ministros? Si no hay más, comento que tenía un criterio semejante al de la señora Ministra Luna, pero creo que son dos condiciones distintas, y como no está a discusión la constitucionalidad de la disposición que funda este poder, pues con base en ello, -como bien decía el señor Ministro Pardo- es una condición especial que, finalmente, el interesado asume y quiere que se haga un poder en esos términos.

De tal modo que, con esas consideraciones, votaré a favor del proyecto. Tome la votación, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: A favor del proyecto.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: También.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: En contra.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: A favor.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: En contra.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE AGUILAR MORALES: Con el proyecto.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de ocho votos a favor del proyecto; con voto en contra de los señores Ministros Luna Ramos y Laynez Potisek.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: MUY BIEN. CON ESTO QUEDA ENTONCES, RESUELTA Y APROBADA EN SUS TÉRMINOS LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 287/2017.

No habiendo otro asunto listado para el día de hoy, voy a levantar la sesión. A continuación tenemos una sesión privada, señoras y señores Ministros, que llevaremos a cabo una vez que se desaloje la Sala; y los convoco a la próxima sesión pública ordinaria el día de mañana en este recinto, a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión.

(SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 12:40 HORAS)